

Tema Central ///
Rubén Flores A.

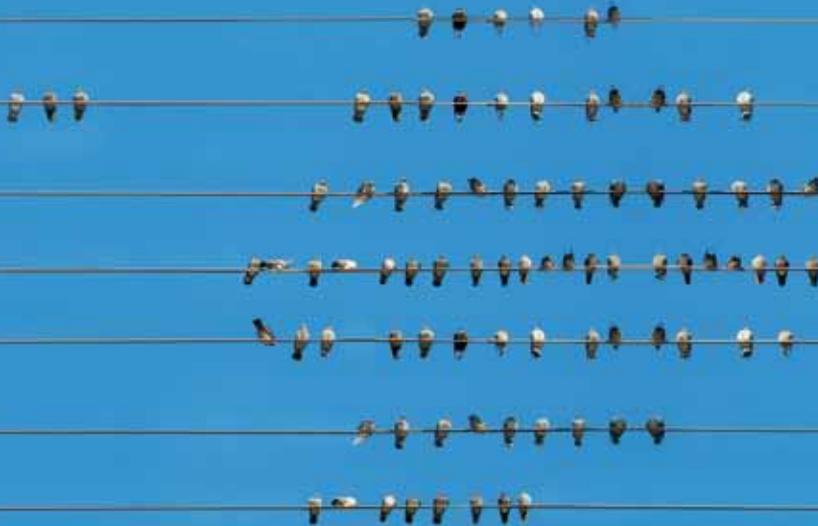
Redistribución en el Ecuador ¿una deuda pendiente?

Los actores económicos frente a las elecciones

La actual crisis mundial ha sido definida por los expertos como una crisis sistémica, debido a al profundo impacto que está provocando en ciertas estructuras y a sus implicaciones asimétricas. Pero sobretodo, es una crisis que se interpreta como consecuencia de las políticas económicas pro mercado, liberales (desreguladoras) y aperturistas dominantes en el mundo. Esto lo reconoció oportunamente el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, quien manifestó que “la verdad es que la mayoría de los errores se reducen a solo uno: la creencia en que los mercados se ajustan solos y que el papel del Gobierno debiera ser mínimo”.

A esto se suma la opinión de otro Nobel, Paul Krugman, que en un artículo escrito para el NY Times afirma que “los fundamentalistas del libre mercado se han equivocado acerca de todo y, todavía así, hoy en día dominan el escenario político más a fondo que nunca”.

Ante esta situación, los tomadores de decisiones de política pública en los diversos países han corrido diferente suerte a la hora de implementar medidas para afrontar la crisis. Un claro ejemplo la Eurozona, donde gobiernos de todas las tendencias ideológicas – el español Zapatero (centroizquierda) o el ita-



liano Berlusconi, (derecha empresarial) abandonaron el poder debido a la falta de resultados económicos, las altas tasas de desempleo y la creciente protesta social. Por el contrario, en América Latina la reacción oportuna junto con cambios en la política regional, sumada a un sector financiero no tan desarrollado, ha ayudado para que la factura de la crisis mundial no sea tan alta como en las economías supuestamente más poderosas. Sin embargo, no debemos olvidar que en un mundo tan globalizado, una crisis como ésta también conlleva mecanismos de transmisión de múltiples dimensiones que pueden llegar a afectar a las economías latinoamericanas, como una posible caída de exportaciones por la contracción de la demanda europea o la guerra devaluatoria emprendida por varios países.

Dentro de este contexto, la evolución de la economía ecuatoriana a través de las cifras macroeconómicas ha mostrado signos favorables: el crecimiento económico ha sido sostenido a pesar de la crisis; los ingresos fiscales se han diversificado y los no petroleros son más representativos (cerca del 59% desde el 2008); y el consumo ha aumentado. En el sector social, la pobreza se ha reducido y el desempleo para marzo del 2012 es de 4.80%, la tasa más baja en América Latina.

A pesar de esos avances, que han logrado darle al gobierno de Rafael Correa estabilidad económica y política, es necesario avanzar en la transformación de la matriz productiva, basada en la diversificación de actividades económicas que reduzcan la dependencia actual en el modelo primario extractivista. Es necesario también advertir también de los efectos del neo-extractivismo: producción y exportación de productos primarios con más renta para el estado, pero que sigue sin contribuir al desarrollo de encadenamientos que dinamicen la actividad económica, que agreguen valor, que fortalezcan las capacidades de innovar, que democratizen el

acceso a los recursos naturales con una explotación sostenible social, económica y ambiental. Debemos evitar seguir estructuralmente dependiendo de la volatilidad de los precios de los productos energéticos, que fluctúan constantemente en los mercados internacionales debido a variables externas de la coyuntura mundial. Lo cierto es que de forma inminente, y con el desarrollo de los proyectos mineros ya planificados y aprobados, viviremos una profundización del modelo primario neo-extractivista y seguirá pendiente en materia de política pública la intensificación de acciones en aras de la consecución de una verdadera transformación productiva.

Si bien uno de los puntales del accionar gubernamental es el énfasis en el desarrollo social para la reducción de la pobreza y la indigencia (los indicadores confirman el avance en este eje), es necesario analizar la otra cara de la moneda. La concentración de la riqueza y de los medios de producción continúa como un tema estructural muy poco topado (a pesar de que hay avances en el tema de la ley anti monopolios) y todavía estamos a la espera de políticas que permitan una mejor redistribución de estos recursos y eviten prácticas desleales que generen a su vez mayores beneficios y mayor concentración del poder económico.

Toda la riqueza del país, en muy pocas manos

En este aspecto es fundamental la estrategia del Servicio de Rentas Internas, que desde el 2006 da seguimiento a las operaciones de una lista de grupos

económicos, que empezó con 17, para el 2009 fueron 51 y en la actualidad ascienden a 100, con cerca de 3.570 integrantes entre personas naturales y sociedades. La mayoría de estos grupos económicos ha logrado expandir sus

“La concentración de la riqueza y de los medios de producción continúa como un tema estructural muy poco topado y todavía estamos a la espera de políticas que permitan una mejor redistribución de estos recursos”

actividades históricamente a varios sectores de la economía de manera horizontal y vertical. De los 10 grupos con mayores ingresos, 7 tienen como actividad principal la intermediación financiera, mientras los restantes el comercio y la agroexportación. Al examinar los ingresos de los 51 grupos más relevantes durante el 2006 estos fueron de aproximadamente 13.386 millones de dólares y para el 2010 se incrementaron a 20.711 millones lo que representa un aumento de un 55% en tan solo 4 años.

Si se compara los ingresos de estos conglomerados en el Producto Interno Bruto ecuatoriano, se observa que lo generado por estas empresas representa en promedio, un 34% de la producción nacional (en el periodo 2006-2010). El hecho de que la tercera parte del PIB nacional sea producida por un grupo de empresas que representan apenas el 0,7% de los contribuyentes registrados por el SRI, es un signo claro y preocupante de concentración. Además, dos de los grupos que más incrementaron sus ingresos están ligados a posibles candidatos a la Presidencia de la República. Según los datos del SRI, el Grupo Banco de Guayaquil vinculado a Guillermo Lasso tuvo un incremento en sus ingresos de 61% dentro del periodo planteado, mientras que el conglomerado de empresas de Álvaro Noboa lo hizo en un 20%.

Adicional al tema de conglomeración de la riqueza, es preocupante que se siga manteniendo una alta concentración de ciertos recursos productivos en muy pocas manos. En el sector agropecuario, donde la intervención gubernamental tiene una deuda pendiente, se contempla que en cuanto a tenencia de tierra, el 64% de las UPAs¹ son pequeñas extensiones (hasta 5 hectáreas), de las cuáles solamente se destina el 6,27% de hectáreas totales a la producción. Por otro lado, el 2,32% de UPAs –aquellas mayores a 100 hectáreas cada una– concentran el 42% de la tierra disponible para producción².

1.- Unidad de Producción Agropecuaria.
2 y 3.- III Censo Nacional Agropecuario.

Si además analizamos el problema del agua que, a más de su importancia para el ciclo productivo es indispensable también para la vida cotidiana de quienes dependen de la agricultura, se tiene que apenas el 6,91%, aproximadamente 200 mil hectáreas del total del suelo, tiene acceso a riego. Dentro de extensiones hasta de 5 hectáreas, apenas el 16% tiene acceso a algún sistema hídrico, mientras que en tierras de 50 hectáreas o más en manos de escasas UPAs se encuentra el 51,25% de parcelas con riego, evidenciando la falta de acceso al agua de los pequeños productores y la alta concentración y consumo de este recurso vital en manos de los grandes agricultores que se dedican a la exportación y/o a la agroindustria³.

Sin duda, la alta concentración de los recursos de ciertos sectores de la economía productiva nacional ha favorecido la generación de monopolios u oligopolios, gracias a la puesta en marcha de estrategias desleales y barreras de entrada que no han permitido que iniciativas productivas nacionales o extranjeras entren a competir en los mercados locales. Esto pretende ser modificado con la Ley Antimonopolios aprobada recientemente y cuyo reglamento e instituciones ejecutoras siguen en proceso de implementación.

Otro problema que ha generado la concentración del poder económico en el Ecuador es la calidad de la información que se recibe por parte de los medios de comunicación. Esto es debido a que los medios más importantes a nivel nacional pertenecían (antes de la reforma constitucional) o están vinculados de alguna manera a grupos económicos, lo cual incrementa la posibilidad de sesgos en la oferta de información, ya que se obedece a una lógica económica y no comunicacional. Esto ha generado una lucha de poder comunicativo entre el estado y los medios privados, y una subsecuente pugna que acarreó varios enfrentamientos verbales y legales de gran escala, como el caso del diario El Universo. Un conflicto que además alimentó el debate internacional sobre el rol de la CIDH y su posible vinculación a intereses estadounidenses y de grandes corporaciones con poder económico en América Latina y el mundo.

La importancia del rol regulador del Estado

El rol del Estado debe ser más activo en la regulación de la competencia en el Ecuador: es necesario que una vez aprobada la Ley Antimonopolio, ésta permita regular ciertos mercados y sectores, impidiendo abusos a los trabajadores y consumidores, y mejorando el control fiscal sobre las grandes empresas. Eso supone definir con claridad una posición opuesta al espíritu de los últimos tratados de libre comercio firmados por nuestros vecinos con EUA y la Comisión Europea.

Generar políticas que fomenten el cambio y la diversificación de la matriz productiva, la distribución equitativa de la riqueza, erradiquen la pobreza, fomenten circuitos de economía solidaria e impidan la concentración de los medios de producción, son los grandes objetivos que orientan algunas de las iniciativas y políticas públicas ya puestas en marcha por el gobierno de la revolución ciudadana. Pero todavía queda mucho camino por hacer a la hora de provocar un cambio estructural en la concentración de la riqueza, que hasta ahora no ha mostrado grandes cambios desde “el fin de la gran noche neoliberal”, sino que incluso se ha acentuado. Esto supone que una parte importante de los beneficios impulsados por la política pública terminen fortaleciendo una vez más a aquellos que tienen el poder del mercado. Y ésta es la otra deuda pendiente que debemos pagar.

Los actores económicos frente al proceso electoral

Si la ruta de transición del país hacia la redistribución, pese a sus límites, ha permitido garantizar una mayor rentabilidad al capital no especulativo, se podría espe-

rar que algunos sectores de la banca, del comercio y de la industria estén dispuestos a apostar por la continuidad de la revolución ciudadana, a pesar de las exacerbadas y constantes críticas que expresan en los medios de comunicación. Pero también habrá otros sectores económicos que, más allá de las oportunidades y beneficios que les ofrece el país actualmente, buscarán apostar a una mayor liberalidad empujando una candidatura de sus propias filas, aún a sabiendas que tendrá pocas posibilidades de ganar. Finalmente, más que conseguir la presidencia, lo que les interesa es colocar con fuerza un discurso que cuestiona la intervención del Estado y que aboga por la recuperación del paraíso desregulado que han ido perdiendo.

“Es necesario que una vez aprobada la Ley Antimonopolio, ésta permita regular ciertos mercados y sectores, impidiendo abusos a los trabajadores y consumidores, y mejorando el control fiscal sobre las grandes empresas”

De su lado, los actores de las economías populares y solidarias (cooperativas, asociaciones y otros colectivos) están a la espera de una profundización de los cambios que les garantice una mayor participación en la economía nacional. Unos considerarán

que esa profundización puede venir de la mano de PAÍS. Otros tal vez crean que hace falta mayor velocidad y apostarán por candidaturas auto-proclamadas de izquierda radical. Especialmente en el campo, y tomando en cuenta que el propio gobierno reconoce la deuda pendiente con la revolución agraria, posiblemente varias organizaciones condicionarán su apoyo a las candidaturas de PAÍS o de las otras izquierdas a cambio de programas de gobierno comprometidos firmemente con la soberanía alimentaria.

Es de esperar que en esta fase pre electoral se abran escenarios para evaluar lo que se ha hecho en redistribución de la riqueza y desconcentración de los medios de producción, en el cambio de las matrices productiva y energética. Escenarios en los que se pueda debatir sobre cómo profundizar en los próximos años la transformación hacia un verdadero régimen de economía social y solidaria. ///